

Decreto 25/1993, de 24 de febrero, en relación con el artículo 17 del Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del R.D. Legislativo de evaluación de impacto ambiental (modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo), se comunica al público en general que el estudio de impacto ambiental sobre el Proyecto de Restauración Zulema Nº 00807-00 en el término municipal de Zalamea de la Serena, podrá ser examinado, durante treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, en las dependencias de la Dirección General de Medio Ambiente, Avenida Portugal, s/n., de Mérida.

Las personas interesadas en este estudio, podrán presentar sus sugerencias y alegaciones, dentro del plazo citado anteriormente, en el Registro General de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, Avenida Portugal, s/n., de Mérida.

Lo que se comunica a los efectos oportunos y para el general conocimiento.

Mérida, a 1 de abril de 2005. El Director General de Medio Ambiente, GUILLERMO CRESPO PARRA.

ANUNCIO de 4 de abril de 2005 sobre notificación de la Resolución de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, de fecha 24 de febrero de 2005, recaída en el procedimiento sancionador (PS/0193) que se sigue contra D. Anselmo Romero Regajo por el incumplimiento de la obligación de arranque de parcelas ilegales de su registro vitícola comunitario.

Habiéndose intentado, sin resultado, la notificación de la Resolución de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria de fecha 24 de febrero de 2005, recaída en procedimiento sancionador número PS/0193 cuyo tenor literal se transcribe como Anexo I, a D. Anselmo Romero Regajo, con D.N.I. nº 80.042.023-E, con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Berrocal nº 5 del municipio de Fregenal de la Sierra (Badajoz), con relación al incumplimiento de la obligación de arranque de parcelas ilegales de su registro vitícola comunitario, se comunica la misma, a los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27 de

noviembre de 1992), en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14 de enero de 1999).

Mérida, a 4 de abril de 2005. El Director General de Política Agraria Comunitaria, ANTONIO CABEZAS GARCÍA.

ANEXO I

“De acuerdo con los antecedentes de hecho y las consideraciones jurídicas anteriormente expuestas, esta Dirección General considera a D. ANSELMO ROMERO REGAJO responsable de la infracción administrativa tipificada en el artículo 39.1 m) de la Ley 24/2003 y, en su virtud, RESUELVE

Imponer a D. ANSELMO ROMERO REGAJO la sanción de 2.001 euros, con exigencia de la reposición de la situación alterada por la infracción, efectuando el arranque de la plantación ilegal.

MULTA COERCITIVA: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.3 de la Ley 24/2003, en el caso de incumplimiento de la obligación de arranque de viñedos, las multas coercitivas se impondrán con una periodicidad de seis meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación de la Resolución sancionadora, hasta el cumplimiento total del arranque, y su importe será de 3.000 € por hectárea.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución, ante esta Dirección General o ante el Consejero de Agricultura y Medio Ambiente, en virtud de lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que estimen oportuno, según el artículo 89.3 de la Ley 30/1992.

Notifíquese la presente Resolución al interesado con la mención expresa de los requisitos exigidos por los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Mérida, a 24 de febrero de 2005. EL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA. Antonio Cabezas García”.

El texto íntegro de esta carta se encuentra archivado en el Servicio de Registro de Explotaciones y Organismo Pagador de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, sito en la Avda. de Portugal, s/n. de Mérida, donde podrá dirigirse para su constancia.
